

El PP pide coherencia al Gobierno sobre el gasto social

Rajoy reclama más fondos para los servicios que prestan las autonomías

PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL
Madrid

El principal discurso político del Gobierno sobre la crisis es que en ningún caso, por muy mal que se pongan las cosas, se recortará el gasto en servicios sociales. Según José Luis Rodríguez Zapatero, eso es lo que hace "la derecha" en tiempos de dificultades. El líder del PP, Mariano Rajoy, aprovechó ayer este argumento para defender las propuestas de su partido en la revisión del sistema de financiación autonómica. "El gasto social es la dependencia, la sanidad, la educación", recordó ayer Rajoy. Competencias autonómicas, en definitiva. Por tanto, si el Ejecutivo no mejora sustancialmente la financiación de las autonomías, estará, *de facto*, recortando gasto social.

A pesar de este discurso, precisamente algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han puesto dificultades, según ha denunciado

el Gobierno central, para el desarrollo de medidas sociales como la Ley de Dependencia (retrasando las valoraciones de las minusvalías, por ejemplo). También han boicoteado, según denunció el Gabinete, otras políticas sociales que son de su competencia, como la acogida de menores inmigrantes.

Rodeado de los presidentes autonómicos del PP en San Millán de la Cogolla (La Rioja), Rajoy presentó un "decálogo" para la financiación de las comunidades. El documento exige que el acuerdo se haga a 15 bandas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, frente a la negociación bilateral que exige Cataluña.

El principal criterio para la revisión del sistema debe ser el reconocimiento del aumento de población, dice el PP. Este argumento es compartido por Madrid y la Comunidad Valenciana (que reciben dinero del Estado de acuerdo con el censo de 1999, con lo que un millón de nuevos habitantes en cada una de esas



Rajoy, con Herrera y Vivas, presidentes de Castilla y León y de Ceuta, / EFE

comunidades no son tenidos en cuenta), pero no es bien visto en la subplada Castilla y León, por ejemplo. En declaraciones posteriores a la reunión con Rajoy, el presidente castellanoleonés, Juan Vicente Herrera, no dejó de reiterar que para calcular las necesidades financieras de las comunidades autónomas de-

ben ser tenidas en cuenta la superficie, la dispersión de la población y su envejecimiento, factores que benefician a su tierra.

Excepto la exigencia de que no suban los impuestos, la mayoría de los puntos del PP ya están sobre la mesa de la negociación entre el Gobierno y las autonomías.

Carod nombra a su hermano delegado de la Generalitat en Francia

J. FOGUET, Barcelona

El número dos de la Generalitat de Cataluña, el independentista Josep Lluís Carod Rovira, nombró ayer a su hermano, Apel·les Carod Rovira, delegado del Gobierno catalán en Francia. Apel·les Carod ya había contado con la confianza de su hermano en el primer tripartito de izquierdas con Pasqual Maragall de presidente, desde 2004 hasta 2006, y ocupó varios cargos, como director general y secretario de Coordinación Interdepartamental, y luego secretario del Consejo Técnico de la Generalitat.

La tarea del hermano de Carod en París será representar a la Generalitat en la capital francesa, tanto a nivel comercial como en la Unesco, de la que Cataluña es miembro.

En Esquerra Republicana este tipo de nombramientos gubernamentales necesitan el acuerdo de la dirección partido, pero en esta ocasión no ha sido así. Fuentes republicanas se limitaron a decir que "son cosas de Carod".

Declaración de las Universidades Públicas Madrileñas sobre el Sahara Occidental

Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA)

El proceso de descolonización del Sahara Occidental —más de treinta años después— continúa pendiente de solución, sin que las permanentes resoluciones de Naciones Unidas reafirmando el ejercicio del principio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui —marco legal irrenunciable para una salida justa y democrática en el ámbito de la legalidad internacional— acabe aceptándose, entre otros, por el Gobierno de Marruecos. Ese estancamiento provoca un conflicto político que afecta a la estabilidad, seguridad, desarrollo y futuro de la región, una permanente violación de los derechos humanos de los ciudadanos en las zonas ocupadas así como un grave problema humanitario debido a la situación de la población saharaui en los campamentos de refugiados en Tindouf (Argelia), dependientes de la cooperación y ayuda internacional. A España, a su gobierno, a sus instituciones, a las diversas administraciones, a las fuerzas políticas, a las organizaciones sociales, a su sociedad, le corresponde, como antigua potencia colonial y aún hoy administradora del territorio, jugar un papel activo y una implicación político-diplomática directa en la resolución de este problema descolonizador inacabado, sobre la base de las normas y principios de la comunidad internacional.

Resulta sorprendente, incomprensible e injustificado que sea la sociedad civil española —y no otros ámbitos— quien más esté aportando en esta vía de sensibilización y ayuda al pueblo saharaui. Desde estas consideraciones y frente a estas realidades, las universidades públicas madrileñas: Universidad Autónoma, Universidad de Alcalá, Universidad Carlos III, Universidad Complutense, Universidad Politécnica y Universidad Rey Juan Carlos, por segundo año consecutivo abrieron, del 27 al 30 de mayo de 2008, un espacio público de reflexión al cual fueron invitados todos los actores —políticos, sociales, culturales, académicos, artísticos e intelectuales, nacionales e internacionales— para conocer, dialogar, debatir, profundizar y sensibilizar sobre el mundo saharaui, buscando resituar en la agenda política, social y cultural del país la cuestión del Sahara Occidental y favorecer una solución que respete el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. Las universidades públicas madrileñas quieren sumarse así a otras iniciativas —antiguas y recientes— generadas desde distintos colectivos sociales y de la opinión pública con idéntica finalidad.

En este marco concreto y frente al bloqueo actual del proceso de la libre determinación, las universidades públicas madrileñas pedimos al Gobierno y a las fuerzas políticas la formulación y ejecución de un pacto de Estado que junto a la sociedad civil permita, desde la práctica del consenso, la solución de este conflicto. En cuyo diálogo las universidades nos ofrecemos a participar.

Por otra parte, y desde la autonomía universitaria, las universidades públicas madrileñas asumimos mediante la presente declaración un conjunto de compromisos en relación a las políticas a diseñar y ejecutar en el tema saharaui:

1. Seguir potenciando la plataforma universitaria estable de trabajo solidario que permita abordar proyectos e iniciativas compartidas con las instituciones y la sociedad saharaui a corto, medio y largo plazo en los ámbitos de sensibilización, investigación y formación orientados a establecer un buen conocimiento de la realidad saharaui y de su historia que facilite una mejor intervención social.
2. Reactivar programas de cooperación, entre otros, en el ámbito de la educación secundaria y superior, en el desarrollo de la enseñanza y difusión de la lengua española, el reconocimiento, defensa y protección —con el respaldo de organismos internacionales— del patrimonio cultural y de la memoria histórica saharaui, así como en el trabajo, la salud y demás aspectos que mejoren la calidad de vida en los campamentos y en los territorios liberados. Y solicitamos, en este sentido, la implicación de los distintos ministerios y administraciones involucrados, desde el Ministerio de Educación, Política Social y Deportes, Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (AECID), Ministerio de Cultura (Instituto Cervantes), Comunidad de Madrid (Consejería de Educación y Consejería de Inmigración) y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
3. Observar críticamente el papel de los medios de comunicación no sólo en la mejora de la difusión de la causa saharaui entre la sociedad y opinión pública, sino también en la denuncia de la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados.
4. Elevar estos compromisos al resto de universidades españolas siendo asumidos por la CRUE.

Finalmente, afirmamos que sólo mediante la adopción y puesta en práctica de políticas de esta clase podría comenzar a repararse dignamente, y aunque sea aún de forma insuficiente y tardía, la inmensa deuda de reconocimiento, de afecto y de agradecimiento que España tiene contraída con el pueblo saharaui.

Madrid, 11 de julio de 2008

